



167

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA**

Tunja, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinte (2020)

**Medio de control:** Acción Popular- medida cautelar  
**Demandante:** Yesid Figueroa García  
**Demandado:** Municipio de Tunja y otros  
**Radicación:** 15001-33-33-003-**2017-00041-00**

**I. ASUNTO**

Ingresa el expediente al Despacho, para pronunciarse sobre el impedimento manifestado por la doctora Emilsen Gelves Maldonado, como titular del Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja.

**II. ANTECEDENTES**

Por medio de auto de 01 de septiembre de 2017 (fs. 1-2), se admitió la demanda de acción popular instaurada por el ciudadano Yesid Figueroa García contra el municipio de Tunja, y se decretó la medida cautelar consistente en:

*“Ordenar al Representante Legal del Municipio de Tunja, que dentro de los cinco (05) días siguientes a la recepción de la comunicación correspondiente, adopte medidas de seguridad, como la señalización y cierre el paso peatonal del andén y la zona circundante, frente al inmueble con “Nomenclatura 24-07 Casa Esquinera contigua al Parque Prospero Pinzón y la Biblioteca del Banco de la República”. Así mismo, en el mismo término, informe al Despacho con registro fotográfico y documental, el cumplimiento de la medida cautelar aquí ordenada.”*

Con auto de 12 de febrero de 2018 (f. 22), se dispuso adicionar la medida cautelar adoptada mediante auto anterior, de la siguiente manera:

*“Ordenar al representante legal del Municipio de Tunja, para que adopte medidas de seguridad, como la señalización y cierre el paso peatonal del andén y la zona circundante, frente al inmueble con “Nomenclatura 24-07 Casa Esquinera contigua al Parque Prospero Pinzón y la Biblioteca del Banco de la República”. Así mismo, informe mensualmente al despacho con registro fotográfico y documental el cumplimiento de la medida cautelar aquí ordenada y hasta tanto se resuelva de fondo.”*

Mediante sentencia de 04 de octubre de 2018, el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó amparar los derechos colectivos al goce del espacio público, seguridad y salubridad pública, y

seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles, providencia en la que se impartieron las siguientes órdenes:

*“CUARTO: ORDENAR a la señora MARÍA CONSUELO LONDOÑO CUERVO, que en un término no superior a 15 días calendario, instale sobrecubierta provisional, así como un alero de protección de madera rolliza, tabla y lona, en la totalidad de la cubierta del inmueble y demás primeros auxilios requeridos para proteger el inmueble, previa autorización del Municipio de Tunja, quien además deberá vigilar su correcta instalación. En caso de no cumplirse por parte de la propietaria esta medida de primeros auxilios en el término indicado, estará a cargo del Municipio de Tunja, dentro de los quince (15) días siguientes, pudiendo repetir contra la propietaria siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 69 de la Ley 9 de 1989, sin perjuicio de las sanciones correspondientes por desacato.*

*QUINTO: ORDENAR a la señora María Consuelo Londoño Cuervo que en un término máximo de 30 días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, inicie el trámite para la obtención del permiso de intervención ante el Ministerio de Cultura y la licencia de la Curaduría, y una vez obtenido el mismo, en un término de seis (06) meses, inicie la ejecución de las acciones necesarias y provea los medios y recursos económicos y humanos para la liberación, reforzamiento estructural, reintegración y restauración del inmueble de su propiedad ubicado en la esquina de la carrera 8 del Parque Pinzón con nomenclatura 24-07 de la ciudad de Tunja, identificado con número predial 010200940015000 y folio de matrícula inmobiliaria No 070-62473 conforme a las razones expuesta en la parte motiva. En caso de vencerse este término sin que la propietaria del inmueble haya cumplido la orden judicial, estará a cargo del Municipio de Tunja y para el recobro de los dineros invertidos deberá adelantar el procedimiento señalado en el artículo 69 de la Ley 9 de 1989.*

*SEXTO: ORDENAR al representante legal del Municipio de Tunja adoptar y mantener las medidas de seguridad como la señalización y cierre permanente del paso peatonal en el andén y de la zona circundante, frente al inmueble ubicado en la carrera 8 No 24-07/09 Casa Esquinera CONTIGUA AL Parque Prospero Pinzón y la Biblioteca del Baco de la Republica de la ciudad de Tunja, hasta tanto cese la amenaza con las instalación de los primeros auxilios decretados en el numeral cuarto de esta providencia. Conforme a las razones expuestas en la parte motiva.*

*SÉPTIMO: ORDENAR al Ministerio de Cultura brindar asesoría, acompañamiento y vigilancia para la ejecución de las obras de primeros auxilios y obras definitivas de restauración.*

*(...)*

*NOVENO: Conformar un comité para la verificación del cumplimiento de lo decidido, el cual estará integrado por el actor popular, el Alcalde del Municipio de Tunja o su delegado, por la propietaria del inmueble señora MARÍA CONSUELO LONDOÑO CUERVO y por un delegado de la entidad*

*vinculada Ministerio de Cultura, de conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes harán seguimiento a lo ordenado en el fallo e informarán trimestralmente sobre las acciones que se adopten o ejecuten. En todo caso la gestión del comité irá hasta que se cumpla con la sentencia o se interponga incidente de desacato. Librense las comunicaciones pertinentes.”*

“

A través de sentencia de 29 de abril de 2019, la Sala de Decisión No 2 del H. Tribunal Administrativo de Boyacá, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, confirmó la decisión adoptada por el *a quo* y dispuso adicionar la sentencia apelada en el sentido de declarar vulnerado el derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación. Asimismo, dispuso:

*“TERCERO: ORDENAR al municipio de Tunja que coordine con la Policía Metropolitana de Tunja la vigilancia permanente del inmueble ubicado en la carrera 8 No 24-07 de Tunja para evitar actos vandálicos en el mismo. Además adelante campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía sobre la conservación del Centro Histórico de Tunja, y su zona de influencia, de conformidad con el numeral 8 del artículo 95 superior. en el que se consagra que la protección de los recursos culturales también es un deber de los ciudadanos”.*

Finalmente, mediante auto de 21 de junio de 2019, el H. Tribunal Administrativo de Boyacá dispuso la remisión del expediente a la Sección Quinta del Consejo de Estado para su eventual revisión, en consideración a la solicitud efectuada por el actor popular, con el fin de que fije posición unificada respecto al reconocimiento de las agencias en derecho, la publicación de la parte resolutive de la sentencia, el término que debe observarse por el juez para proferir sentencia y, en consecuencia, invalide parcialmente la sentencia proferida en segunda instancia.

### III. DEL IMPEDIMENTO MANIFESTADO

La doctora Emilsen Gelves Maldonado, titular del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, manifestó encontrarse impedida para conocer del asunto, al configurarse la causal contemplada en el numeral 3.º del artículo 30 del CGP, mediante auto de 16 de enero 2020.

Lo anterior, en virtud de que su compañero permanente Libardo Ángel González fue nombrado a partir del 02 de enero del año que avanza, en el cargo de secretario de Despacho de la planta de personal del municipio de Tunja, empleo que conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 785 de 2005<sup>1</sup>, pertenece al nivel directivo de la entidad territorial.

En este orden, la Juez Tercera Administrativa Oral del Circuito de Tunja indicó que se configuraba el supuesto de hecho de la causal de impedimento en mención, comoquiera que en el presente asunto el actor popular demandó al municipio de Tunja.

<sup>1</sup> Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regula por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.

#### IV. CONSIDERACIONES

El Despacho no aceptará el impedimento formulado por la titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja, al no considerar configurada para el caso concreto la causal prevista en el numeral 3.º del artículo 30 del CGP, y ordenará la devolución del expediente al Despacho de origen, según las siguientes razones:

El numeral 3.º del artículo 130 del CPACA establece, entre otras, la siguiente causal de nulidad:

*“Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos...”*

*(...)*

*“3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurren al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado.”*

*(Subraya fuera de texto)*

Ahora bien, en Sentencia C-496 de 2016, la Corte Constitucional definió el impedimento, así:

*“Técnicamente, el impedimento es una facultad excepcional otorgada al juez para declinar su competencia en un asunto específico, separándose de su conocimiento, **cuando considere que existen motivos fundados para que su imparcialidad se encuentre seriamente comprometida.** Sin embargo, con el fin de evitar que el impedimento se convierta en una forma de evadir el ejercicio de la tarea esencial del juez, y en una limitación excesiva al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia (Artículo 228, C.P.), jurisprudencia coincidente y consolidada de los órganos de cierre de cada jurisdicción, ha determinado que los impedimentos tienen un carácter taxativo y que su interpretación debe efectuarse de forma restringida”.*  
*(Resaltado del Despacho)*

En este mismo sentido, respecto a la procedencia de los impedimentos, el Consejo de Estado señaló:

*“El impedimento y la recusación han sido concebidos como instrumentos idóneos establecidos por el legislador para hacer efectiva la condición de imparcialidad del juez o del funcionario judicial en la toma de decisiones. Uno y otra cosa son **figuras legales que permiten observar la transparencia dentro del proceso judicial y que autorizan a los funcionarios judiciales a alejarse del conocimiento del mismo.**”*

*Las causales de impedimento son taxativas y de aplicación restrictiva, comportan una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que le corresponde al Juez, y como tal, están debidamente delimitadas por el*

legislador y no pueden extenderse o ampliarse a criterio del juez o de las partes, por cuanto la escogencia de quien decide no es discrecional.

*Para que se configuren debe existir un “interés particular, personal, cierto y actual, que tenga relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento de manera que impida una decisión imparcial”<sup>2</sup>. Se trata de situaciones que afecten el criterio del fallador, que comprometan su independencia, serenidad de ánimo o transparencia en el proceso.*

*El artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia le impone a los Jueces el deber de respetar, cumplir y, dentro de la órbita de sus competencias, hacer cumplir la Constitución y la ley.*

*La imparcialidad e independencia judicial, como objetivos superiores, están orientadas a garantizar que las actuaciones se ajusten a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad, sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública. artículo 209 del Constitución Política.”<sup>3</sup>*  
(Resaltado del Despacho)

De lo anterior, puede concluirse que el régimen de impedimentos y recusaciones se encuentra establecido como un mecanismo que busca garantizar el principio de imparcialidad del funcionario judicial y hacer efectivo el principio de igualdad de trato jurídico, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, según las causales previstas por la ley y que disponen supuestos fácticos concretos para su configuración.

#### **Del caso en concreto:**

Verificada la actuación, se observa que la medida cautelar decretada a través de auto de 01 de septiembre de 2017, adicionada mediante providencia de 12 de febrero de 2018 (f. 10 y s.s), dispuso ordenar al representante legal del municipio de Tunja adoptar las medidas de seguridad y de señalización en el andén y la zona circundante frente al inmueble ubicado en la nomenclatura 24-07 casa esquinera contigua al Parque Prospero Pinzón de Tunja, asimismo, la presentación de un informe mensual al Despacho con registro fotográfico y documental del cumplimiento de la medida, **hasta tanto se resuelva de fondo**.

De igual manera, se tiene que fue proferida decisión de fondo, mediante sentencia de 04 de octubre de 2018, misma que fue confirmada por el H. Tribunal Administrativo de Boyacá, quien, entre otras cosas, ordenó al representante legal del municipio de Tunja adoptar y mantener las medidas de seguridad, como la señalización y cierre permanente del paso peatonal en el andén y de la zona circundante del inmueble, hasta tanto cese la amenaza con las instalación de los primeros auxilios que debe realizar la propietaria del mismo.

De acuerdo con lo expuesto, este Despacho puede advertir dos aspectos, el primero, es que la actuación en cuanto al trámite de la primera instancia para la

<sup>2</sup> Consejo de Estado. Sala Plena. auto de 9 de diciembre de 2003. expediente S-166

<sup>3</sup> Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente rad. No 11001-03-25-000-2005-00012 C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila

adopción de una decisión de fondo dirigida a la protección de los derechos colectivos invocados, y de segunda instancia, con relación a la alzada, a la fecha se encuentra surtido, por manera que están agotadas las etapas propias del proceso de acción de popular.

El segundo aspecto es que solo resta una actividad de verificación que no exige del fallador una decisión para la definición de un derecho, de tal manera que el criterio y transparencia de la juez de conocimiento no resultan comprometidos, ni afectados con dicho trámite de verificación, máxime, que este corresponde al Comité conformado por el actor popular, el alcalde del municipio de Tunja o su delegado, por la propietaria del inmueble, señora María Consuelo Londoño Cuervo, y por un delegado de la entidad vinculada, Ministerio de Cultura.

De otra parte, en este punto del escenario procesal, valga mencionar que la adopción de medidas de seguridad en cuanto a señalización y cerramiento del andén a cargo del municipio, se avizora que han sido cumplidas<sup>4</sup>, y que ante un eventual incumplimiento de las órdenes impartidas a aquel, en derecho corresponderá dar apertura al trámite incidental de desacato para efecto de analizar la conducta personal **del alcalde municipal** (servidor encargado del cumplimiento de la orden judicial), dirigida a definir una responsabilidad que es de **carácter subjetivo**, es decir, se debe establecer la **negligencia de la persona** en el cumplimiento de la decisión<sup>5</sup>, lo cual en manera alguna puede alterar las órdenes adoptadas en el fallo de la acción constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** **No aceptar** el impedimento manifestado por la doctora Emilsen Gelves Maldonado, titular del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** **Devolver** las diligencias al Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja.

**TERCERO.** Por Secretaría dejar las anotaciones y constancias de rigor en el registro de actuaciones Siglo XXI.

**Notifíquese y cúmplase**

  
**ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ**  
Juez

JUZGADO CUARTO  
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD  
DEL CIRCUITO DE TUNJA

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE  
NOTIFICA POR ESTADO  
ELECTRÓNICO

N 10 De hoy 28 de febrero de  
2020  
a las 8:00 a.m.

  
**FERNÉY MAURICIO DÍAZ  
HERNÁNDEZ**  
SECRETARIO

<sup>6</sup> AMRS

<sup>4</sup> Registro fotográfico fs. 145-146

<sup>5</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. auto 3508 de 30 de abril de 2003. CP  
González Murcia

<sup>6</sup> Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 28 de febrero de 2020 en la página web  
www.cjct.gov.co. Fernéy Mauricio Díaz Hernández – Secretario